

un solo sector que presidirá Paulino Niembro, flanqueado por Julio Antún, Alberto Natiello y el ex rebelde Serú García. En cuanto a Rodolfo Tecera del Franco, será vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, según se acordó ya con otros partidos.

Mientras la política comenzaba a transitar por cauces normalizados, el presidente del Banco Central, Félix Elizalde, serio, pero intentando restar trascendencia a lo que iba a decir, enfrentó a los periodistas que lo interceptaron en el Ministerio de Economía y les anticipó que iban a darse a conocer las normas de un nuevo ordenamiento cambiario.

## PROBLEMAS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS EN EL GOBIERNO

Una semana antes, una tumultuosa conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Economía, con asistencia de periodistas argentinos y corresponsales extranjeros, el ministro Eugenio Blanco y el mismo Elizalde habían alardeado de la estabilidad de la situación, con frases que perpetuó la crónica: "Estamos emitiendo y no hubo necesidad de devaluar: hemos producido en materia cambiaria, el milagro argentino. No renegociamos nuestra deuda exterior, sino que la pagaremos hasta el último dólar. Vamos a salir del club de los deudores". Era un desafío que entusiasmaba por aquellos años a muchos argentinos, una temeridad, y el dólar (la representación más nítida de la pesada deuda externa) se agazapó a la espera de su revancha. Estaba cerca.

Cuatro meses después -el 12 de agosto- el gobierno de Illia producía su primera devaluación y llevaba la cotización del dólar de 137 pesos a 142,50. No habían transcurrido tres meses más cuando ya se toleraba la segunda: la cotización, que el 9 de noviembre rondaba los 144 pesos, se elevó, esa misma tarde, a 149,50. El entusiasmo de unos meses antes había caído en el olvido.

En París, el subsecretario de Relaciones Exteriores se sentaba a la mesa con los embajadores argentinos en Europa Occidental, para preparar terreno a la refinanciación de la deuda externa, aunque Ramón Vásquez trató de minimizar en sus declaraciones la urgencia de ese tema.

Quizá como nunca en los 18 meses de la administración Illia se advirtió la desorientación que cundía entre sus colaboradores, tanto del Ejecutivo como del Legislativo; el lirismo que a menudo inundaba la acción de gobierno, fue reemplazado finalmente por el choque de intereses internos y la confusión.

El diputado Eduardo Massolo (UCRP) anunció que presentaría un proyecto para derogar la Ley de Asociaciones Profesionales, cuando más arreciaba la decisión de la CGT de hostigar la política laboral del PE.

No se dio respuesta en cambio a otro tema financiero: la autorización para que la CGT descunte 100 pesos de los jornales del 1° de mayo, unos 170 millones de pesos que rejuvenecerían las exhaustas arcas de la central obrera. Si el gobierno concede ese permiso, entrará en colisión con los gremios independientes, sus únicos adictos en el campo sindical.

Paulino Niembro retocaba los últimos tramos de un proyecto de ley de amnistía para que retornen al país los argentinos desterrados por motivos políticos. Saltó una duda: ¿debía mencionarse a Juan Domingo Perón? La omisión era ingenua, la inclusión seguramente sería borrascosa.

El peronismo seguía buscando el camino que debe emprender el 1° de mayo: era una ruta todavía obstaculizada por las prevenciones y los roces que pueden subsistir. El cónclave del Sindicato de Cerveceros que consolidó la unidad del peronismo en un bloque parlamentario era una nueva espina para el gobierno que veía desintegrar su teoría sobre la división del peronismo.

Fue esta unidad el paso más importante después de la victoria del 14 de marzo.

**El peronismo seguía buscando el camino que debe emprender el 1° de mayo: era una ruta todavía obstaculizada por las prevenciones y los roces que pueden subsistir. El cónclave del Sindicato de Cerveceros que consolidó la unidad del peronismo en un bloque parlamentario era una nueva espina para el gobierno que veía desintegrar su teoría sobre la división del peronismo.**

Dentro del polifacético esquema del bloque peronista, los proyectos que emergerán de allí a partir del 1° de mayo podrán señalar concepciones distintas. Ese día arranca la 5ª etapa del Plan de Lucha de la CGT y, seguramente, los gremialistas se enrolarán en la defensa del operativo sindical, convirtiendo al Parlamento en caja de resonancia de los 13 puntos.

La zona neoperonista pondrá el acento en las medidas económicas; la más importante: proyectar la nacionalización de los depósitos bancarios. En lo político se auspiciarán la reforma constitucional y la modificación del Estatuto de los Partidos.

Pero éstos no son sino jirones del programa legislativo que el peronismo se ha lanzado a estructurar después del 14 de marzo.

La presencia de los 52 diputados es un formidable instrumento de acción proselitista y que a través de ellos el peronismo puede asegurarse los votos extrapartidarios que engrosaron su caudal en los recientes comicios. Delante de ellos, sólo la UCRP constituye una fuerza; claro que la UCRP necesita maniobrar con extrema habilidad frente al peronismo, ya que por sí sola no puede controlar el Parlamento.

En el almuerzo mensual de los corresponsales extranjeros, el diputado electo Tecera del Franco expresó: "Creo conveniente señalar que en el peronismo desaparecieron los grupos sectarios, y el movimiento se presenta hoy con vocación de servir al país".

El secretario general del Partido Justicialista, Carlos Lascano, dijo por radio. *"No nos inspira ningún resentimiento ni estamos en espíritu de plantear ninguna clase de rendición de cuentas. Se han perdido demasiados años como para que podamos tener otra preocupación que la del futuro". El gobernador del Chaco, Deolindo F. Bittel, opinó ante un grupo de periodistas que "el peronismo no fue a las posiciones públicas para cobrar agravios recibidos ni ejercer venganzas". Una presunta carta de Perón dirigida a los nuevos legisladores y a Los Cinco, en uno de cuyos párrafos sostenía: "cuéntenme a su lado para lo que se necesite y consúltenme en lo que quieran consultarme. Yo estoy a la recíproca con ustedes después de tan magnífico triunfo".* Todas estas actitudes públicas del peronismo le daban un nuevo rostro frente a otros sectores. Aparecía como un peronismo maduro, sin "vendettas". En el oficialismo mientras tanto, muchos aspiraban a un cambio en el ritmo temperamental del médico de Cruz del Eje.

El esperanzado indicio de una modificación de las prácticas presidenciales quedó sugerido a principios de este mes desde la plana mayor de la UCRP, cuando se estimó que se había logrado convencerlo de que inaugurara las reuniones de gabinete. La convocatoria del pleno ministerial conferiría una imagen institucionalizada y serviría para disipar algunas dudas sobre la falta de coherencia del equipo gobernante.

Las anheladas reuniones serían presididas por el titular del Interior. Así, Juan S. Palmero, oficioso pero realmente, quedó transformado en una especie de primer ministro.

Dentro de la UCRP, la figura que aparece con relieves propios para asumir la conducción es Arturo Mor Roig, que cuenta con asentimiento de los grupos internos, pero habría que sacrificar a un diputado que asoma como candidato a volver a presidir la Cámara o eventualmente como titular del bloque de la UCRP. El otro problema consiste en determinar qué destino le será reservado a Balbín: el supuesto de que pueda asignársele un cargo diplomático en el exterior es dudoso, sólo al final de su vida Balbín aceptará una invitación para viajar al exterior.

Sin embargo, el balbinismo no se da por vencido: paralelamente a la faena partidaria para conservar posiciones o acrecentarlas, está empeñado en una gestión tendiente a sumar otros adeptos en el gabinete. Cuatro ministros responden a la línea del Comité Nacional: Fernando Solá (Trabajo), Arturo Oñativia (Asistencia Social), Carlos Alconada Aramburu (Educación) y Pugliese (Economía).

**Las gestiones del presidente de YPF, Facundo Suárez, para comprar petróleo ruso en canje por trigo fue otro problema. Fue una actitud diversionista dentro de la política general que quiere asumir Pugliese, y un factor imponderable para la marcha de una gestión que se propuso: completar en un mes las negociaciones para llegar a un arreglo con las compañías petroleras privadas, cuyos contratos fueron anulados. Ese plazo ya quedó reducido a la mitad, sin avizorarse resultados.**

Amigos de la UCRP, capitaneados por el ganadero Pedro Duhalde, adelantarían cerca de 100 millones de pesos que serán cubiertos con acciones populares, cuya suscripción se encarará en el interior. Pero el trono de Balbín se muestra cada día más resquebrajado. El ministro Pugliese no ganaba para sustos.

Las declaraciones de dos funcionarios vinieron a perturbar sus planes; Juan Palmero, de Interior, aseveró que no habría cambios en el gabinete, y el director de Abastecimiento, Roberto Cabiche, dijo que iba a prorrogarse el estado de emergencia económica que justificó el sistema de control de precios y que caduca a fin de mes.

Fueron dos contrariedades porque, a esta altura de su gestión, Pugliese considera que el llamado equipo técnico -ministro de Obras Públicas, secretario de Transportes, subsecretarios dependientes- debe ser relevado de sus funciones para no comprometer más la salud de las finanzas públicas; y, en el otro orden, porque estima que el problema del costo de la vida no se solucionaría a través de los controles, sino mediante el saneamiento de la economía y la nivelación de los desfases que se registran en la producción y en la oferta respecto de la demanda.

Además, Pugliese tuvo que soportar otro asedio: cuatro horas de argumentaciones lanzadas por el gobernador de Tucumán, Lázaro Barbieri, quien llegó a Buenos Aires para distraer la atención de gobernantes y legisladores y volcarla hacia el problema crónico de Tucumán: la pauperización a través de la explotación antieconómica de la caña de azúcar, que obliga permanentemente a solicitar subsidios.

En ese lapso, las esperanzas del gobernador se redujeron casi a cero: entró en el despacho ministerial solicitando 20.000 millones de pesos de inmediato, y se retiró cuatro horas después con la promesa de que se iba a estudiar la posibilidad de que en 20 meses y a razón de 150 millones de pesos anuales, se adelanten los 3.000 millones de pesos que corresponderían a la provincia de Tucumán por coparticipación federal, concepto que se aplica a ciertos impuestos que recauda la Nación y que reparte luego con las provincias. Este tema de coparticipación federal se irá agravando con el tiempo lo cual es un indicador más que elocuente que el interior del país se empobrece constantemente. Las migraciones hacia los grandes centros urbanos no se detienen sino que por el contrario se aceleran. El país se vacía.

El caso de Barbieri no es excepcional. Implacablemente, las autoridades provinciales concentran su artillería de pedidos sobre la Tesorería Nacional; para ellas no cuenta la necesidad de practicar reducciones presupuestarias tendientes a sanear la economía, moderar la inflación y merecer así la buena voluntad de los acreedores del exterior. Lo que cuenta es la urgencia de ejecutar los planes provinciales de obras públicas, con recursos que las autoridades provinciales no pueden o no saben encontrar en sus dominios. Una de estas cargas -la del gobernador de Córdoba, Páez Molina- fue rechazada hace algunas semanas por el secretario de Hacienda, con una frase inspirada: "Si la provincia no tiene dinero propio para construir su propia Casa de Gobierno, más le valdría declararse gobernación". Esta actitud encolerizó aún más a los cordobeses.

Las gestiones del presidente de YPF, Facundo Suárez, para comprar petróleo ruso en canje por trigo fue otro problema. Fue una actitud diversionista dentro de la política general que quiere asumir Pugliese, y un factor imponderable para la marcha de una gestión que se propuso: completar en un mes las negociaciones para llegar a un arreglo con las compañías petroleras privadas, cuyos contratos fueron anulados. Ese plazo ya quedó reducido a la mitad, sin avizorarse resultados.

Alguna clase de acuerdo con los petroleros era imprescindible para dar refinanciación inminente de la deuda externa; tanto como la devaluación monetaria, el incremento de la recaudación impositiva y la reducción de los gastos públicos. Pugliese lo sabe y se propone conseguir todo eso, pero Santiago Fassí no lo entendió claramente, al parecer, cuando al cabo de una reunión en el bloque de senadores informó que no se devaluaría la moneda -"lo mismo diría en caso de que se

proyectara lo contrario", acotó-, no se celebraría ninguna acuerdo de stand by, ni se refinanciaría la deuda externa en forma global.

Sin embargo, todos los esfuerzos de Pugliese, apoyados por el secretario de Hacienda, conducen a la solución de los problemas del sector externo.

El movimiento de viajeros se enriquecía con el inminente arribo del secretario ejecutivo del CONADE, Bernardo Grinspun, que había entretenido a las autoridades del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, a la espera del Plan de Desarrollo, y la partida de su colega Roque Carranza en compañía del presidente del Banco Central.

Dinero se necesitaba y no únicamente a nivel nacional, sino también dentro de los límites domésticos; el problema de los salarios en la órbita de las dependencias económicas. El subsecretario de Hacienda, Juan Carlos Delconte, suspendió por 30 días a los integrantes de La Asociación del Personal de Economía y Hacienda, firmantes de una violenta, justiciera solicitada, publicada tres días antes en el vespertino "La Razón".

Hace más de un año, -comunicaban- pidieron al secretario de Hacienda, Carlos García Tudero, un nuevo escalafón, recurrieron luego al Ministerio de Economía, a diputados y senadores de distintos partidos, y al hermano del presidente de la AFA: ningún resultado. Salvo la medida disciplinaria dictada por Delconte.

El personal celebró una asamblea en la playa de automotores del Palacio de Hacienda; allí se formó una comisión que debía entrevistar a las autoridades. Los empleados y obreros de maestranza y servicios se acumularon en los pasillos del 5° piso, en apoyo de la comisión y los funcionarios quedaron bloqueados, salvo el ministro Pugliese, que dejó el edificio sin recibir hostilidades.

El titular de Defensa, Leopoldo Suárez, sin saber qué estaba pasando, y los tres secretarios militares; fueron a tratar el aumento de sueldos de la FF.AA. El vaso desbordó. Los manifestantes se encolerizaron más aún y convinieron en renovar sus protestas al día siguiente.

No fue posible; unos 50 agentes de policía impidieron cualquier reunión o desplazamiento. García Tudero se dispuso entonces a lograr un acuerdo mediante el levantamiento de la suspensión y el proyecto de un plan aceptable para el personal olvidado.

## PROBLEMAS ECONÓMICOS EN LA CGT

Una misma necesidad de dinero corroía a la Confederación General del Trabajo; en Azopardo 802 volvió a comentarse la pavorosa escasez de fondos que maniató a la central obrera. "Faltan recursos, inclusive, para organizar el acto público del 1° de mayo", sostuvo José Alonso.

El tema fundamental continuó siendo la retención de 100 pesos por trabajador del 1° de mayo, con destino a la CGT.

El gobierno no anunció si renovará el permiso para practicar esa retención, y el asesor letrado de la CGT, Fernando Torres, conferenció con Julio César Saguier, director general de Asociaciones Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resultado: cero.

Saguier contestó que la decisión no dependía de él y propuso que el secretario de la CGT, José Alonso, conversara con el ministro Fernando Solá; Alonso pareció inclinarse por ese criterio, pero en una reunión del Secretariado se desechó la idea: la audiencia podía ser utilizada por el gobierno con fines propagandísticos y no existe certeza alguna de que el vapuleado Solá accediera a la solicitud de la CGT. Los directivos de la CGT concluyeron que sólo podían recurrir al fuero contencioso-administrativo, para que una orden judicial obligue al Ministerio a expedirse